

Presupuesto Universitario: **Medio siglo de carencias y un año de crisis**

Por Eduardo Díaz de Guijarro

Desde estas páginas de La Ménsula intentamos recuperar nuestra historia, la historia de Exactas, con el ánimo de que la incansable renovación generacional no sepulte nuestro pasado, sus sueños, triunfos y fracasos. Nuestra historia nos aporta identidad, nos permite interpretar nuestra labor cotidiana como parte de un proceso colectivo que continuamos con el mismo compromiso y pasión de quienes nos precedieron. La mirada del pasado no es consecuencia de una vocación nostálgica, sino es comprender cómo llegamos a donde llegamos y estar mejor preparados para entender los desafíos del presente y del futuro. Esta edición de La Ménsula es en cierto modo atípica, es fruto de la demanda urgente del presente. Su autor, Eduardo Díaz de Guijarro, Coordinador del Programa de Historia desde su creación hasta hace pocos años, recurre al pasado para recuperar episodios similares al actual, caracterizado por el ahogo presupuestario, becas en extinción y salarios reducidos a la mitad de su poder adquisitivo.



Marcha en defensa de la educación pública, Buenos Aires, 23 de abril de 2024. Gracias a la enorme movilización se logró que el gobierno otorgara poco después un aumento en los gastos mínimos para el funcionamiento de las universidades nacionales. (Foto: somostelam.com.ar)

A partir de la asunción de Javier Milei a la presidencia, en diciembre de 2023, se produjo en Argentina una crisis en el sistema de educación pública, hasta entonces nunca vista.

El presupuesto universitario fue congelado, repitiendo los valores del período anterior e ignorando la altísima inflación interanual, de 287,9% entre marzo de 2023 y marzo de 2024. El año lectivo tuvo enormes dificultades para iniciarse, con fondos para funcionamiento insuficientes y sueldos de docentes y no docentes en niveles de miseria.

La reacción popular fue masiva. El 23 de abril se realizaron marchas en defensa de la educación pública en todo

el país, en las que participaron no sólo estudiantes, docentes y no docentes universitarios, sino miles de personas que, aun no siendo universitarios, comprenden la necesidad de que el Estado garantice la educación pública y apoye la investigación científica. En Buenos Aires se reunieron alrededor de 500.000 personas, y otro tanto sumando los manifestantes del resto de las ciudades.

Gracias a la protesta, el gobierno tuvo que ceder, aunque muy parcialmente. Otorgó un aumento de los llamados gastos de funcionamiento, que permitieron pagar la energía eléctrica y los insumos básicos, aunque los salarios siguieron muy atrasados con relación a la inflación.



Al comenzar el segundo cuatrimestre, la situación crítica se repitió. Los aumentos que pretendió dar el gobierno fueron irrisorios, llevando a docentes y no docentes al borde de la miseria, lo que evidencia una política deliberada de achicamiento del sistema público de educación superior.

¿Qué nos dice la historia?

El problema del presupuesto universitario no es nuevo.

Desde hace mucho tiempo que, en la mayor parte del mundo, los docentes no son un sector social bien remunerado. Pero en la Argentina la situación se agravó a mediados del siglo XX, y más aún a partir de la sangrienta dictadura militar que comenzó en 1976.

El movimiento estudiantil ya había salido a las calles a protestar por las carencias presupuestarias en la década de 1960. Entre 1955 y 1966, en la UBA se consiguieron importantes avances, gracias al impulso de destacados científicos, como el rector Risieri Frondizi, y el decano de nuestra facultad, Rolando García. Entre otras cosas, se inició la construcción de la Ciudad Universitaria, se designaron numerosos docentes con dedicación exclusiva, se pudieron financiar laboratorios de enseñanza y de investigación y se creó Eudeba.

Pero durante esa época hubo varios golpes de estado y cambios de gobierno. 1962 fue un año de represión a trabajadores y a universitarios. El atraso en el pago de los sueldos de

docentes y no docentes llevó a estos últimos a declararse en huelga todo el segundo semestre. Desde 1964, durante la presidencia del radical Arturo Illia y hasta el golpe de Onganía en 1966, se sucedieron las manifestaciones de estudiantes y docentes reclamando mayores recursos para la universidad.

El 17 de mayo de 1966, los docentes con dedicación exclusiva de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales realizaron un paro de 24 horas reclamando el aumento de sus sueldos. Al día siguiente, el decano Rolando García y el secretario Arístides Romero publicaron una solicitada en el diario El Mundo, apoyando ese reclamo y sosteniendo que, si las autoridades no lo aceptaran, “se comprometerán en parte el futuro del país y sus posibilidades de desarrollo. La Universidad puede destruirse en un día, pero para reconstruirla serán necesarios decenios”.

Poco después, se produjeron un nuevo golpe militar y “La Noche de los Bastones Largos”. La policía apaleó a estudiantes y docentes en varias facultades y provocó renuncias masivas del cuerpo docente. Tal como había presagiado Rolando García, la reconstrucción de los equipos de trabajo en los laboratorios de investigación y la recuperación del nivel académico fue un proceso complejo y largo, que insumió varias décadas.

A partir de 1976, la dictadura cívico militar aplicó una política sangrienta, con asesinatos, torturas y desapariciones

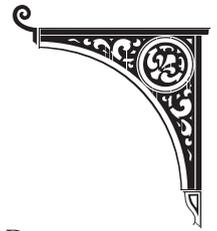
forzadas, para permitir que su ministro Martínez de Hoz aplicara un plan económico que dio comienzo en nuestro país al neoliberalismo, impulsado por los grandes capitales extranjeros y sus socios locales. Se produjo un desfinanciamiento del Estado, la apertura a las inversiones extranjeras y el cierre de industrias nacionales. Los universitarios no sólo fueron reprimidos política y físicamente. También se restringió el ingreso y se habilitó el pago de aranceles. Todas estas medidas eran dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. El arancelamiento duró poco tiempo. En 1983, al recuperarse la democracia con el triunfo del radical Raúl Alfonsín, se restauró la gratuidad.

En marzo de 1984, ante la asamblea legislativa, Alfonsín dijo que “con la democracia no sólo se vota, sino que también se come, se educa y se cura”. Pero lamentablemente esa predicción no resultó cierta. La situación del país fue empeorando hacia el final del siglo. La educación pública sufrió uno de sus peores retrocesos en la década de 1990, cuando las entidades financieras transnacionales impulsaron a escala global una política para disminuir el gasto público y optimizar las ganancias de las grandes empresas privadas, tanto nacionales como multinacionales.

En la Argentina, el gobierno presidido por el peronista Carlos Menem aplicó fielmente esas directivas. Privatizó empresas estatales y, en las universidades, congeló salarios y presupuesto. Algunas



Manifestación de universitarios frente al Congreso, Buenos Aires, 12/5/1966 (Diario Clarín)



Cerca del final de la dictadura militar, los estudiantes se manifestaron contra las medidas restrictivas. En la foto, quema de carteles y libretas para el pago del arancel universitario, frente a la Facultad de Ciencias Económicas, septiembre de 1983 (Caldelari y Funes, 1992)

universidades comenzaron a cobrar aranceles encubiertos y muchos laboratorios de investigación ofrecieron servicios a terceros para poder financiar sus trabajos.

En 1992, como irónica señal de protesta, durante las Jornadas en Defensa de la Educación Pública, una gigantesca bandera de remate fue colgada del Pabellón 2 de la Ciudad Universitaria, expresando el sentimiento y el reclamo de la comunidad educativa.

Tres años después, el gobierno menemista promulgó la Ley de Educación Superior (LES), aceptando las condiciones fijadas por el Banco Mundial. La LES jerarquiza las universidades privadas y avala las restricciones presupuestarias y la semiprivatización de las públicas, al permitir que éstas completen sus necesidades financieras creando "recursos propios", mediante convenios con empresas o cobro de servicios a terceros. De ese modo, la formación de profesionales y la investigación científica resultan condicionadas por

las necesidades de las corporaciones, y no reciben el suficiente apoyo del Estado para atender las prioridades más urgentes del conjunto de la sociedad.

Las primeras décadas del siglo XXI

En 1999 asumió el gobierno el radical Fernando de la Rúa. En marzo de 2001 su ministro de Economía, Ricardo López Murphy, anunció una reducción del veinte por ciento del presupuesto educativo. La medida estaba en sintonía con una reducción general de los salarios y una reforma laboral para reducir costos a las grandes empresas.

Pero hubo alternativas. El 19 de marzo hubo tomas de facultades y clases públicas en las calles, con una extensión y unanimidad pocas veces vistas en la historia de las universidades argentinas. Al día siguiente, López Murphy renunció.

2001 terminó con una insurrección popular, que obligó a de la Rúa a renunciar. Luego de una difícil etapa de transición, en 2003 asumió la

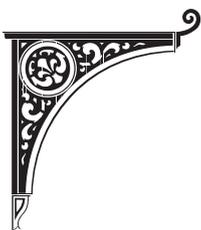
presidencia Néstor Kirchner. Durante su gobierno y el de Cristina Fernández de Kirchner se produjeron varias mejoras. Se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el Conicet aumentó la cantidad de becas y de cargos para investigación, y las remuneraciones se incrementaron significativamente. Sin embargo, las presiones del FMI y del Banco Mundial continuaron. En términos generales, la legislación universitaria aprobada en 1995 continuó vigente. Salvo la reforma que garantiza la gratuidad de los estudios de grado en las universidades públicas, la LES menemista se mantuvo, con una creciente injerencia de las corporaciones en el sistema público. La precariedad salarial no desapareció, pues en muchas facultades siguieron existiendo docentes ad-honorem, que no cobran remuneración alguna, y otros que reciben remuneraciones muy inferiores al nivel de su trabajo.

Entre 2015 y 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri, también influido fuertemente por las políticas del FMI, de las multinacionales y de los más poderosos empresarios argentinos, nuevamente se planteó el problema de la escasez presupuestaria. En agosto de 2018 se produjo una de las manifestaciones más masivas en defensa de la educación pública, reclamando mayor presupuesto y mejoras salariales. Los actos se multiplicaron en las principales ciudades del país, con la participación de estudiantes, docentes, investigadores, no docentes, autoridades universitarias y gremialistas, que impidieron que las medidas del gobierno siguieran avanzando.

El educidio de hoy

Las atrocidades cometidas recientemente por la extrema derecha a escala mundial dieron nacimiento a nuevas palabras, que reflejan nuevos y terribles fenómenos.

Analistas de las Naciones Unidas introdujeron recientemente el concepto de educidio para caracterizar las acciones bélicas que tienen por finalidad destruir escuelas y universidades, como si se tratara de objetivos militares, lo que parece ser un intento de eliminar no sólo la presencia



física del enemigo sino también de borrar todos los rastros de su cultura y la garantía de su desarrollo futuro.

Pero existe también otra forma de educidío, que lamentablemente estamos viviendo en la Argentina en el presente. Al minimizarse la inversión estatal en educación y en ciencia se intenta eliminar nuestra capacidad de pensamiento independiente, bajar el nivel cultural de la población y reducir el país a un productor de materias primas exportables y un terreno apto para los negocios de las grandes multinacionales, a cuyos dueños el actual presidente denomina “héroes”.

Hoy el ataque contra la educación pública tiene una intensidad inédita y no sólo consiste en desfinanciarla. Es parte de una campaña de desprestigio de todo lo público, que trata de dismantelar las tradiciones democráticas de nuestra sociedad, para debilitarla y subordinarla a los intereses de los grandes multimillonarios. Si esta campaña tuviera éxito, se comprometería el bienestar colectivo nacional por mucho tiempo.

Esa falta de apoyo estatal dificulta, por ejemplo, las investigaciones biomédicas que apuntan a la producción de vacunas o a la cura de enfermedades endémicas vinculadas con la pobreza, ignoradas por las multinacionales farmacéuticas, que priorizan la fabricación de los medicamentos que les dan mayores ganancias. En las ciencias sociales quedan sin recursos los proyectos que apuntan a la mejor comprensión de las desigualdades y de las causas de la pobreza. Además, la escasez de docentes y los bajos sueldos deterioran el nivel general de la enseñanza en todas las carreras. Los graduados egresan sin la formación y los conocimientos necesarios para enfrentarse a sus futuros trabajos. También ocurre que muchas



Bandera sobre el Pabellón 2 de la Ciudad Universitaria, septiembre de 1992
(Foto: S. Sede, Archivo Histórico FCEN)

universidades e institutos no pueden afrontar los costos de proyectos de investigación básica, cuyos resultados prácticos son difíciles de predecir, aunque al cabo de cierto tiempo pueden resultar de gran utilidad para la humanidad.

A pesar de su intensidad y de sus características novedosas, los intereses en juego parecen ser los mismos que se reflejaron en las situaciones que reseñamos en este artículo, ocurridas en distintos momentos y bajo diferentes gobiernos locales. Los actuales “héroes” son los mismos o responden a similares intereses económicos que los que presionaron a los militares para dar los golpes de estado, los que redactaron, en las trastiendas del poder, la LES, y los que evitan año tras año que el presupuesto nacional cubra adecuadamente las necesidades de las universidades públicas, allanando el camino al sistema privado, que es funcional a sus negocios.

Hasta ahora, la reacción de los universitarios y del conjunto de la población logró impedir que esos planes

alcancen su destructivo objetivo final y gracias a ello las universidades públicas se mantienen en pie.

Uno de los fundamentos de la resolución del Consejo Directivo de la FCEN que creó el Programa de Historia en 2005 dice que “Conocer el pasado es imprescindible para comprender el presente y proyectar el futuro”. Con la breve información que hemos sintetizado en este artículo intentamos cumplir con esa intención y plantear algunos interrogantes que puedan servir para nuestro presente y nuestro futuro.

¿Es el educidío actual un fenómeno aislado o se trata de una nueva versión, más intensa que las anteriores, de un proceso que lleva ya muchos años? ¿Se trata de la política de determinados partidos o gobiernos, o existen además causas económicas que las condicionan? ¿Cuál es el verdadero papel de los “héroes” de las finanzas y de la gran industria, locales e internacionales? ¿Qué ocurriría si los universitarios no reaccionamos a tiempo y reclamamos todas las veces que sea necesario por la defensa de la educación pública y de la ciencia?

La Ménsula

La Ménsula es una publicación del Programa de Historia - Secretaría General - FCEN - UBA

Editor Responsable: Carlos Borches. Comité Editorial: Beatriz Baña, Raúl Carnota, Eduardo Díaz de Guíjarro. Diseño: Secretaría de Comunicación. Si tiene fotografías, volantes, anécdotas, historias para contar en nuestra publicación, no dude en comunicarse con nosotros.

Mail: lamensula@de.fcen.uba.ar o programahistoria@de.fcen.uba.ar

La colección completa de La Ménsula se puede consultar en: <https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/mensula/page/about>
Presentaciones de La Ménsula y otros materiales históricos en el Canal del Programa de Historia:

<https://www.youtube.com/c/HistoriaExactasUBA>

El Programa de Historia en la Web <https://exactas.uba.ar/institucional/programa-de-historia-de-la-fcen/>

UBAEXACTAS